
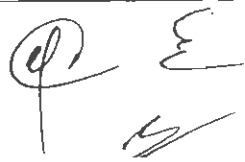


| | | | |
|--|--|--|---------------------|
|  Defensoría del Consumidor | TRIBUNAL SANCIONADOR | Fecha: 21/05/2019 Hora: 08:52 Lugar: Ciudad y departamento de San Salvador | Referencia: 1517-13 |
| RESOLUCIÓN FINAL | | | |
| Documentos que anteceden: | El día 22/06/2018 se recibió escrito (folios 93 y 94). firmado por _____ y _____ apoderados especiales de _____ S.A. de C.V., antes _____ De Centro América, S.A., a través del cual evacuan la audiencia conferida mediante resolución de las 09:01 horas del día 28/05/2018 (folio 85 y 86). | | |
| I. INTERVINIENTES | | | |
| Denunciante: | Presidencia de la Defensoría del Consumidor | | |
| Proveedoras denunciadas: | 1) _____ S.A. DE C.V., y 2) _____, S.A. de C.V. antes _____, S.A. | | |
| II. HECHOS DENUNCIADOS | | | |
| <p>La denunciante expuso que con fecha 07/05/2013, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 58 letra f) de la Ley de Protección al Consumidor –en adelante LPC–, se practicó inspección en el establecimiento denominado “Súper _____, propiedad de la proveedora _____ S.A. de C.V., a efecto de obtener muestras de producto. Como resultado de las diligencias realizadas, se levantó el “acta para la toma de muestras de cantidad de producto en preempacados”, de la fecha antes relacionada (folio 5), en la que se documentó la toma de muestra del producto denominado “<i>Empanizador</i> _____, en su presentación de sesenta gramos (60 g) de la marca _____ fabricado y distribuido por _____, S.A. De lo constatado en las referidas actas, se realizó el informe de pesado y de “Informe de Inspección de Contenido Neto en Empanizador” (folios 6 y 9 a 11), que arrojaron como resultado que las muestras presentaron Error Promedio, incumpliendo los requisitos exigidos en los artículos 3.1 y 4.1.1 letra a) del Reglamento Técnico Centroamericano “Cantidad de producto en preempacados” –en adelante RTCA 01.01.11:06–.</p> | | | |
| III. INFRACCIÓN ATRIBUIDA | | | |
| A las proveedoras denunciadas se les atribuye la posible comisión de la infracción muy grave regulada en el artículo 44 letra h) de la LPC, por producir o comercializar productos envasados con contenido neto fuera de la normativa técnica obligatoria, que de comprobarse su comisión. | | | |
| IV. OPOSICIÓN A CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE CONDUCTA DENUNCIADA | | | |
| El presente procedimiento administrativo sancionatorio fue iniciado mediante resolución de las 09:30 horas del día 30/09/2013 (folio 26), en la que conforme a los hechos denunciados, se calificó preliminarmente la conducta atribuida a las denunciadas como la posible comisión de la | | | |



infracción prevista en el artículo 43 letra f) de la LPC. No obstante, este Tribunal en pleno ejercicio de sus facultades y en apego a los principios y garantías constitucionales, consideró en aras del irrestricto respeto a los principios procesales de legalidad y tipicidad, recalificar los hechos denunciados a la posible comisión de la infracción muy grave regulada en el artículo 44 letra h) de la LPC *por adecuarse con mayor precisión* a dicho precepto legal, según se expone en resolución pronunciada a las 09:01 horas del día 28/05/2018 (folios 85 y 86).

En esa misma resolución, se confirió audiencia a las proveedoras denunciadas para pronunciarse respecto de dicha recalificación y únicamente S.A. de C.V. se opuso exponiendo que el Tribunal Sancionador ha excedido sus facultades al realizar una recalificación, puesto que la LPC no le confiere esa potestad, además de considerar que se ha transgredido los principios de legalidad y de aportación, regulados en los artículos 3 y 7 del Código Procesal Civil y Mercantil –en adelante CPCM–.

En atención a dichos argumentos es pertinente realizar las siguientes consideraciones:

A. Como ya se estableció en la resolución de las 09:01 horas del día 28/05/2018 antes citada, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 83 de la LPC, corresponde al Tribunal Sancionador instruir los procedimientos sancionatorios en materia de protección al consumidor; y de tal competencia se deriva la facultad de calificar el tipo de infracción al que se adecua la descripción de los hechos denunciados, previo a la imposición de cualquiera de las sanciones señaladas en la LPC (artículo 83 letra b), para que el análisis a efectuar sea coherente con la atribución sancionatoria que se le ha conferido.

En concordancia con lo anterior y en aplicación del principio por el cual el *Juez conoce del derecho*, el operador jurídico realiza un proceso cognoscitivo e interpretativo que supone la aplicación de la norma jurídica al hecho controvertido, y este Tribunal advirtió que los hechos manifestados en la denuncia que dio inicio al presente procedimiento, se adecuaban con mayor precisión a la infracción prevista en el artículo 44 letra h) de la LPC, precisamente porque los hechos denunciados son el ofrecer productos con deficiencias en su contenido neto de acuerdo a lo establecido en la normativa técnica aplicable, según fueron analizados por la Dirección de Vigilancia de Mercado de la Defensoría del Consumidor, concluyendo que sí existe un fundamento de derecho para la recalificación efectuada por este Tribunal Sancionador.

B. Es importante mencionar además que la recalificación realizada por este Tribunal, no atiende a una tipificación totalmente diferente de la inicial, sino de una general a una más específica, pasando de “Ofrecer bienes en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes” a “producir o comercializar productos envasados con contenido neto fuera de la normativa técnica obligatoria” y la especificidad del tipo infractor regulado en la última de las normas citadas, que es propiamente respecto del contenido neto de los productos, siempre fue objeto del debate y de

conocimiento de las denunciadas para que pudiesen ejercer su defensa en virtud de esos hechos desde la resolución de inicio pronunciada por este Tribunal (folio 26), en la que claramente se estipuló que el procedimiento sancionatorio era iniciado por la posible comisión de una infracción a la LPC por haberse encontrado muestras de producto **con deficiencias de peso** respecto de lo reflejado en su etiqueta. En razón de lo anterior, no se han introducido o modificado los términos del debate.

Con la recalificación legal de la conducta de las proveedoras que han sido denunciadas en el presente procedimiento, no se ha transgredido el principio de legalidad, ni el de aportación, pues mediante la misma resolución de folios 85 y 86, se corrió traslado a las proveedoras denunciadas para que se pronunciaran respecto de la recalificación legal de las conductas denunciadas, concediendo este Tribunal un plazo para ello y que en el mismo pronunciamiento pudiesen hacer nuevos argumentos para defenderse e incluso aportar prueba respecto de los hechos denunciados, que continúan siendo los mismos: ofrecer productos (una proveedora como productora de los mismos y otra como comercializadora) que presentaron deficiencia de peso en las muestras analizadas de acuerdo a la normativa técnica vigente. No obstante, la proveedora

, S.A. de C.V. fue la única que se pronunció mediante sus apoderados, pero no incorporó ninguna prueba adicional para respaldar su defensa respecto de los hechos atribuidos.

En razón de lo expuesto anteriormente, no es posible considerar que se haya puesto en indefensión a las denunciadas, pues se les otorgó la oportunidad procesal para defenderse conforme a derecho, respecto de los hechos denunciados y de las conductas típicas atribuidas, razón por la que no se considera haber transgredido ningún principio procesal ni garantía constitucional en el presente procedimiento administrativo sancionatorio, por lo que es procedente continuar con el trámite y conocer el fondo de la presente controversia.

V. CONTESTACIÓN DELAS PROVEEDORAS DENUNCIADAS

Durante el plazo de audiencia otorgado, las proveedoras denunciadas se pronunciaron según se expone a continuación:

A. Los apoderados especiales de S.A. de C.V. contestaron en sentido negativo la audiencia conferida y alegaron la nulidad de la prueba de análisis elaborada por la Dirección de Vigilancia de Mercado por transgredir principios procesales en su obtención (principio de legalidad, principio de defensa y contradicción, principio de inmediación y principio de especificidad) y, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de dicha prueba, solicitaron que se absuelva a su representada. En caso que dicha nulidad no fuera declarada, incorporaron prueba documental y solicitaron que se citara a comparecer a una empleada del Centro de Producción de la denunciada y al analista de la Defensoría del Consumidor que realizó los estudios de peso de los productos objeto de la controversia para esclarecer el procedimiento



seguido para el análisis de peso de las muestras (folios 29 a 31).

Respecto de los alegatos manifestados por los apoderados de la denunciada, estos fueron analizados y resueltos por este Tribunal mediante resolución de las 08:32 horas del día 22/09/2016 (folios 54 a 57), con excepción de la alegada nulidad de la prueba, cuyo pronunciamiento se suspendió para esta oportunidad, razón por la que el mismo será expuesto en el apartado correspondiente.

B. Por parte de S.A. de C.V., mediante escritos presentados por el Apoderado General Judicial (folios 45 a 49), manifestó en esencia que la cantidad de productos objeto del presente procedimiento administrativo no eran representativas en relación con la cantidad total de productos que eran comercializados por la proveedora. Además, alegó que el acta de inspección (folio 5) adolecía de nulidad absoluta, por haber sido realizada por empleados que no contaban con la delegación expresa y por escrito para realizar tal inspección. Finalmente, argumentó que no ha existido dolo o culpa por parte de la proveedora ni se ha causado daños a consumidores.

En cuanto a los alegatos expuestos por el apoderado de S.A. de C.V., es preciso señalar que la nulidad o validez del acta de inspección será determinada en la valoración de la prueba conforme a la documentación que este Tribunal solicitó a la Presidencia de la Defensoría del Consumidor mediante resolución de las 08:32 horas del día 22/09/2016.

VI. ELEMENTOS DE LA INFRACCIÓN ATRIBUIDA

El artículo 27 inciso primero de la LPC dispone: “En **general, las características de los bienes y servicios** puestos a disposición de los consumidores, deberán proporcionarse con información en castellano, de forma clara, **veraz**, completa y oportuna, según corresponda, especialmente en los siguientes aspectos: (...) b) La calidad, **cantidad, peso o medida**, en su caso, de acuerdo a las normas internacionales, expresadas de conformidad al sistema de medición legal o con indicación de su equivalencia al mismo (...).” (El resáltado es nuestro). Asimismo, se establece que las exigencias especiales serán determinadas por las normativas de etiquetado, presentación y publicidad aplicables en cada caso.

Dentro de ese contexto, para el caso del contenido neto en productos preempacados en los diversos puntos de fabricación, distribución y comercialización, deben observarse las exigencias y requisitos que establece el Reglamento Técnico Centroamericano “Cantidad de producto en preempacados” (RTCA 01.01.11:06).

Y es que cada producto preempacado, previamente envasado o con cierre íntegro debe consignar en su etiqueta el contenido neto en unidades del Sistema Internacional (SI), cuyo dato debe ser veraz, siendo que **la cantidad nominal** –el valor declarado de contenido neto que aparece en la etiqueta–**debe corresponder al valor de la cantidad real** –cantidad que de hecho tiene el preempacado según las mediciones efectuadas por los estudios de metrología legal–. Además,

deben tomarse en cuenta las tolerancias de error que la referida normativa técnica permite, para que de acuerdo al numeral 4.1.1 del RTCA 01.01.11:06, un lote se tenga por aceptado o rechazado, es decir, si cumple o no con la normativa de contenido neto de productos preempacados.

En virtud del derecho a una información veraz que tiene el consumidor sobre un producto preempacado, y que es dada a conocer a través de una etiqueta, el proveedor debe cerciorarse -en razón de la reglamentación técnica expuesta- que dicha información corresponde y es fiel con lo que realmente se está poniendo a disposición en el mercado en cualquier nivel de distribución (número 3 del RTCA 01.01.11:06), pues caso contrario, es decir, que la cantidad nominal del producto no corresponde a la cantidad real como resultado de una experticia de metrología, configura la infracción prevista en el artículo 44 letra h) de la LPC (ya vigente al momento en que ocurrieron los hechos), el cual establecía que era una infracción muy grave *producir o comercializar productos envasados con contenido neto fuera de la normativa técnica obligatoria*.

De lo anterior se desprende que la ilicitud se materializa tanto por **producir** como **comercializar** bienes envasados con un peso fuera de lo permitido en las normas técnicas vigentes. Para el caso en específico, refiere a productos cuyo contenido neto no cumple las exigencias reguladas en la normativa técnica obligatoria y al comprobarse tal hecho en perjuicio de los consumidores, la LPC responsabiliza al *productor* de dichos bienes (sin realizar distinción de la etapa de producción en la que recaiga el error), como al *comercializador* de los mismos dentro de un establecimiento con el ánimo de venderlos al público e invitando al consumidor a que adquiriera para su uso o consumo los bienes que al ser verificados respecto de las normas técnicas vigentes de etiquetado resultan con incumplimientos en la información que obligatoriamente debe consignarse en la etiqueta.

VII. VALORACIÓN DE PRUEBA/HECHOS PROBADOS

A. De conformidad con los arts. 146 de la LPC y 313 del Código Procesal Civil y Mercantil —CPCM— de aplicación supletoria conforme al art. 167 de la LPC, las pruebas oportunas, pertinentes y conducentes aportadas en el procedimiento, serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, para determinar los hechos probados relacionados con la infracción atribuida a las denunciadas.

Al respecto, el artículo 63 del Reglamento de la LPC, el cual literalmente establece: “Las actas mediante las cuales los funcionarios de la Defensoría hagan constar las actuaciones que realicen, harán fe, en tanto no se demuestre con prueba pertinente y suficiente su inexactitud o falsedad. El mismo valor probatorio tendrán los informes y otros documentos que emitan los funcionarios y empleados de la Defensoría, en el ejercicio de sus funciones”. De lo anterior, se concluye que el

acta de inspección de la Defensoría del Consumidor goza de *presunción de certeza*, lo cual ha sido reconocido expresamente por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia definitiva emitida en el proceso referencia 130-2006, pues por medio de la misma se ha dado fe de la situación en que fueron encontrados ciertos bienes. Además, reconoce que dicha presunción puede ser desvirtuada con prueba idónea en contrario, que demuestre inconsistencias en la misma.

B. Tomando en cuenta lo antes expuesto, corresponde valorar la prueba incorporada al presente procedimiento, consistente en:

- a) Acta “para la toma de muestras de cantidad de Producto en Preempacados” (folios 5 y 13), en la que consta que los delegados de la Defensoría del Consumidor realizaron inspección en el establecimiento propiedad de _____, S.A. de C.V. y que en el mismo acto –sobre la base de muestreo aleatorio– se realizó también la toma de muestra de productos objeto de análisis en el presente procedimiento.
- b) Informes de pesado y de “Informe de Inspección de Contenido Neto en Empanizador” (folios 6, 9 a 11 y 15), elaborados por la Unidad de Seguridad y Calidad, de la Dirección de Vigilancia de Mercado de la Defensoría del Consumidor, donde luego de los análisis de metrología legal, acreditan que se obtuvo como resultado que del producto “*Empanizador* _____”, en su presentación de sesenta gramos (60 g) de la marca _____ si bien mostraron que los pesos de cada muestra se encontraban dentro de la tolerancia permitida (4.50 g), la prueba del **Error Promedio** reportó un valor negativo resultando en incumplimiento el lote.
- c) Impresión de fotografías de empaque de “*Empanizador* _____” en su presentación de sesenta gramos (60 g) de la marca _____ (folios 7,8, 16 y 17) con las que se establece la presentación de los productos descritos en el informe anterior y en las respectivas actas de inspección, los cuales fueron encontrados en el establecimiento de la proveedora denunciada _____, S.A. de C.V.
- d) Acta de diligencias de anticipo de prueba de las 10:30 horas del día 13/09/2013 solicitada por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor (folio 23), donde consta que el Tribunal Sancionador verificó la existencia del producto objeto del procedimiento, las características del mismo, las condiciones en que dicho producto se encontraba y que el mismo fue destruido en dicho acto y en presencia de los representantes de las proveedoras denunciadas.
- e) Hojas de control estadístico de peso del producto “*Empanizador* _____”, de la marca _____ de fecha 15/01/2013 (folios 37 y 38), las cuales indican que el día 15/01/2013 operarios de la fabricante realizaron control de peso del “empanizador _____”, sin embargo no se especifica la presentación que fue objeto de control, pues en dichas

hojas únicamente se observa "Empanizador" sin delimitar claramente si se trata de la presentación de 60 g. que serían los productos objeto de análisis del presente procedimiento.

f) Acta de declaración de testigos de las 09:00 horas del día 31/10/2016, en la que comparecieron los señores _____ y _____

en calidad de testigos solicitados por la proveedora _____ S.A. de C.V. (folios 73 y 74). En la declaración como testigo de la señora _____

(folios 73 y 74), ingeniera química que trabaja en _____ El Salvador, en esencia aseguró que reconoce las hojas de control de pesado que se encuentran agregadas al presente expediente (folios 37 y 38), pero que no fue ella quien participó en la elaboración de dicho reporte. Manifestó también que existen distintos resultados de pesaje en la producción y que en los controles de peso realizados a la fecha del reporte en comento no estaba incluida la valoración del error promedio. Finalmente, declaró que conoce sobre trazabilidad pero que no podía asegurar si el reporte cumple con la trazabilidad de los productos y que el número de lote se maneja como la fecha de vencimiento de dichos productos.

Respecto de la declaración como testigo del señor _____, analista de seguridad y calidad en la Defensoría del Consumidor, únicamente se estableció que él fue la persona que se encargó de realizar los estudios de peso en los productos té _____ en polvo y harina para atol marca _____ los cuales no son objeto de análisis del presente procedimiento, no obstante declaró que reconocía como suya, la firma puesta en el informe de pesado de folio 11. En este punto es importante mencionar que los apoderados de _____ solicitaron que se tuviera por no cierto el contenido del informe de peso realizado por el señor _____, pero al asegurar el testigo que fue él quien firmó dicho informe y no consta en el presente expediente prueba alguna que desacredite esa afirmación, únicamente se ha comprobado que la firma que aparece en el informe a folio 11 corresponde al referido testigo; sin embargo, la prueba testimonial resulta impertinente en relación con los hechos objeto del presente procedimiento por haber hecho referencia a productos distintos de los relacionados en el informe de folio 9-11, razón por la que la declaración del señor _____ no puede ser valorada por este Tribunal respecto de la presente controversia.

g) Impresión de credenciales de los inspectores señores: _____ e _____

suscritas por la entonces Presidenta de la Defensoría del Consumidor y certificadas por el entonces Director de Vigilancia de Mercado de la misma institución con fecha 31/10/2016 (folios 78 y 79), con las que se acredita que la delegación de las funciones estaba debidamente autorizada, y dado que no consta prueba que desvirtúe su contenido, las actas de inspección del caso en comento cuentan con la presunción de certeza así como con la

| | |
|--|--------|
| <p>legalidad que les otorga la LPC.</p> | |
| h) Impresión del certificado de calibración de balanza electrónica marca | modelo |
| <p>MS1003S/01, serie B225053658, emitido por , división metrología con fecha 03/05/2013; y el certificado de calibración de juego de masas (pesas) de 1mg a 5kg emitido por el fabricante de la balanza avalado por el Servicio Suizo de Acreditación por la Oficina Federal de metrología y certificadas por el entonces Director de Vigilancia de Mercado de la Defensoría del Consumidor (folios 80 a 84), con las que se ha acreditado que la balanza electrónica en comento, fue sujeta a pruebas de calibración el 03/05/2013; y se determinó que dicho instrumento sí cumplía con las normas de metrología legal exigidas para acreditar el estudio realizado por la Dirección de Vigilancia de Mercado.</p> | |
| <p>C. En virtud de la documentación incorporada, se ha sustentado que el acta de inspección no adolece de nulidad como alegó el apoderado de S.A. de C.V., pues los inspectores sí contaban con la debida autorización y actuaron en el ejercicio de sus funciones para realizar dicha inspección. Respecto de la nulidad alegada por los apoderados de</p> | |
| <p>, S.A. de C.V., se concluye que pese a no adolecer de nulidad porque no se ha transgredido ninguno de los principios procesales: de <i>legalidad</i>, pues el análisis de las muestras fue realizado con equipo que cumplía con los requisitos normativos de calibración y metrología; <i>principio de defensa y contradicción</i>, pues las proveedoras fueron notificadas en legal forma de las resoluciones de inicio y de recalificación del presente procedimiento y mediante las que se les confirió un plazo de audiencia para manifestar su defensa (folios 26, 85 y 86); <i>principio de inmediación</i>, pues el análisis de peso de los productos objeto de la presente controversia no es prueba ordenada por este Tribunal sino que es parte de las competencias de la Presidencia de la Defensoría del Consumidor y se ejecutan previamente a dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio de mérito, razón por la que este Tribunal no se veía obligado a intervenir en dicho análisis; y finalmente tampoco se vulneró el <i>principio de especificidad</i> pues no se ha comprobado la vulneración de derechos constitucionales de audiencia ni defensa a las proveedoras denunciadas; este Tribunal no ha tomado en consideración la declaración testimonial del señor analista de seguridad y calidad en la Defensoría del Consumidor, debido a que dicha declaración no es pertinente por tratarse de productos distintos al objeto del presente procedimiento.</p> | |
| <p>VIII. ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN</p> | |
| <p>De los anteriores hechos probados con la prueba documental citada, es preciso establecer entonces, si las conductas denunciadas encajan con los elementos que configuran las infracciones reguladas en la LPC:</p> | |
| <p>Respecto de la infracción regulada en el artículo 44 letra h) de la LPC. La acción de ofrecer</p> | |

bienes que no cumplan las normas técnicas vigentes, vincula obligatoriamente el análisis de la normativa técnica vigente y aplicable, que para el caso como ya se citó previamente es el RTCA 01.01.11:06 que en su artículo 2.7, define un Error Promedio como: “la suma de los errores individuales de los preempacados, (...) dividido por el número de preempacados de las muestras”.

Ahora bien, para determinar si una muestra de productos cumplen o no con lo exigido en el RTCA 01.01.11:06, han de tomarse en cuenta los criterios del numeral 4.1.1. de dicha normativa técnica, en el que se establece que un lote de inspección es aceptado si se cumple y satisface con los siguientes parámetros:

- a) **Que no existan productos con error promedio;**
- b) Que no hayan preempacados no conformes con Error T1; y,
- c) Que se rechace el lote si hay uno o más preempacados no conformes con Error T2.

Finalmente, el mismo numeral 4.1.1. en comento, estipula que un lote de inspección debe ser ***“rechazado si no satisface uno o más de los requisitos.”***

En ese sentido, de la prueba antes citada que fue valorada por este Tribunal, se establece únicamente que la Defensoría del Consumidor se presentó en uno de los establecimientos de la proveedora [redacted], S.A. de C.V., tomó muestras del producto objeto de la presente controversia, que posteriormente las muestras de los productos fueron sometidas a análisis y pruebas, pero no es posible establecer que dichas pruebas fueron realizadas conforme a la normativa técnica correspondiente, pues si bien es cierto el equipo con el que se ejecutaron sí ha sido acreditado que cumple con las exigencias requeridas, el procedimiento con que se realizaron las pruebas no pudo ser acreditado de forma fehaciente, pues habiéndose cuestionado el mismo, no fue debidamente validado por la persona que lo ejecutó, al haberse referido en su declaración a productos que no estaban relacionados al objeto de este procedimiento.

Como consecuencia de lo antes expuesto, no es posible para este Tribunal establecer que el resultado de las pruebas realizadas a las muestras de producto *“Empanizador*

[redacted] en su presentación de 60 g sea fehaciente, y al no existir más prueba en el presente expediente que sustente la realización de dichos análisis conforme a la normativa correspondiente, es procedente *absolver* a las proveedoras [redacted] S.A. de C.V., y

[redacted] S.A. de C.V., por no haberse acreditado que efectivamente los productos objeto del procedimiento presentaran incumplimientos por deficiencias de peso.

IX. DECISIÓN

Por tanto, sobre la base de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 11, 14 y 101 inciso 2º, de la Constitución de la República; 27, 40, 44 letra h), 83 letra b), 97, 146, 147 y 149 de la Ley de Protección al Consumidor; y los artículos 3.1y 4.1.1. literal a) del RTCA 01.01.11:06, este Tribunal **RESUELVE:**

- a) Absolver_a la proveedora S.A. de C.V.,fabricante del producto “Empanizador”, en su presentación de sesenta gramos (60 g) de la marca por la supuesta comisión de la infracción regulada en el artículo 44 letra h) de la LPC (D.L. N° 286 del 31/1/2013).
- b) Absolver_a la proveedora S.A. de C.V., propietaria del establecimiento denominado “Súper” por la supuesta comisión de la infracción regulada en el artículo 44 letra h) de la LPC (D.L. N° 286 del 31/1/2013).
- Notifíquese.

INFORMACIÓN SOBRE RECURSO

La presente resolución no admite recurso de conformidad con lo expuesto en el artículo 167 inciso 3º de la Ley de Procedimientos Administrativos, según el cual: “Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se regirán en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.”; y con lo establecido en el artículo 158 n° 5 del mismo cuerpo normativo, que dispone: “La resolución por la que se decida tramitar el expediente mediante el procedimiento simplificado y la resolución que pone fin al procedimiento, no admitirán ningún recurso (...)”.

PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR.


Claudia Marina Góchez Castillo
Presidente


Mario Antonio Escobar Castaneda
Primer vocal


Óscar Gilberto Canjura Zelaya
Segundo vocal


Secretario del Tribunal

Q